

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL Y AGENDAS DE DESARROLLO RURAL: EL MUNICIPIO RANGEL Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES INTEGRALES DEL PÁRAMO (PROINPA) EN LOS ANDES VENEZOLANOS

Llambí, Luis¹

Recibido: 24-04-2012 Revisado: 01-05-2012 Aceptado: 13-07-2012

RESUMEN

El artículo busca responder las siguientes preguntas: ¿Son compatibles la seguridad alimentaria, la sustentabilidad ambiental, la competitividad de las cadenas agroalimentarias, y el desarrollo territorial rural? ¿Cuáles fueron las condiciones que hicieron posible el crecimiento «endógeno» de algunos territorios rurales de América Latina, incluso bajo condiciones de mercado y de políticas desfavorables? A partir de estos procesos, ¿es posible la convergencia económica y la cohesión social a nivel nacional? Si esto fuera posible, ¿cuáles serían las condiciones necesarias para el diseño y la implementación exitosa de una política nacional de desarrollo territorial rural con criterios de cohesión social y sustentabilidad ambiental? El artículo está estructurado en tres partes. Primero presenta el análisis de un proceso de desarrollo territorial relativamente exitoso en los Andes venezolanos. Una segunda parte está dedicada al análisis de diferentes agendas de política y sus retos tecnológicos e institucionales. Finalmente, en las conclusiones, se abordan las implicaciones de estos análisis para el diseño de las agendas de políticas públicas.

Palabras clave: desarrollo rural territorial, políticas públicas, sostenibilidad, sustentabilidad ambiental, organización de la sociedad civil, Andes Venezolanos

ABSTRACT

The paper seeks to answer the following questions: are food security, environmental sustainability, the competitiveness of agro-food chains, and territorial rural development compatible? Which were the conditions that made possible the endogenous growth of some rural areas in Latin America, even under unfavorable market and policy conditions? From these processes, is it possible economic convergence and social cohesion at the national level? If this were possible, what are the necessary conditions for the design and successful implementation of a national policy on rural territorial development based on social cohesion and environmental sustainability criteria? The paper is structured in three parts. First of all, the analysis of a relatively successful process of territorial development in the Venezuelan Andes is made. Second, the analysis of different policy agendas, and their technical and institutional challenges are presented. Finally, the conclusions address the implications of these analyses for the design of public policy agendas.

Key words: territorial rural development, public policies, long-term sustainability, environmental sustainability, civil society organization, Venezuelan Andes.

¹ Licenciado en Sociología (Universidad Católica Andrés Bello, UCAB); M.Sc. en Sociología Rural (Universidad de Wisconsin); Diploma de Estudios en Desarrollo Económico (Instituto Agronómico del Mediterráneo, Montpellier, Francia); Doctor en Ciencias Sociales del Desarrollo (Centro de Estudios del Desarrollo, CENDES, UCV). Profesor-Investigador (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC). **Dirección postal:** Departamento de Antropología, IVIC, Km. 13, Carretera Panamericana, Caracas, Venezuela. **Teléfonos:** +58-212-9631582; +58-212-5041122; **e-mail:** llambiluis@gmail.com

RÉSUMÉ

L'article a pour objectif de répondre aux questions suivantes: Est-ce que la sécurité alimentaire, la durabilité environnementale, la compétitivité des filières agro-alimentaires, le développement rural et régional sont compatibles? Quelles étaient les conditions qui ont rendu possible la croissance «endogène» dans certaines zones rurales d'Amérique Latine, même dans des conditions du marché et de la politique défavorables? De ces processus, est-il possible une convergence économique et la cohésion sociale au niveau national? Si cela était possible, quelles seraient les conditions de succès de la conception et de la mise en œuvre d'une politique nationale sur le développement des territoires ruraux avec des critères pour la cohésion sociale et la durabilité environnementale? L'article est structuré en trois parties. Tout d'abord, l'analyse des processus de développement territorial relativement bien réussi dans les Andes vénézuéliennes. Une deuxième partie est consacrée à l'analyse des programmes politiques différents et leurs défis technologiques et institutionnels. Enfin, dans les conclusions, on aborde les implications de cette analyse pour la conception de programmes politiques publiques.

Mots-clé: Développement rural et territoriale, les politiques publiques, la viabilité, la durabilité environnementale, organisation de la société civile, des Andes vénézuéliennes.

1. INTRODUCCIÓN

A fines de la década de 1990, en América Latina, la literatura de la nueva ruralidad surgió como eje temático para explicar los procesos de transformación que estaban experimentando las sociedades rurales latinoamericanas en el contexto de los programas de ajuste estructural (PAE), así como de los procesos de globalización de mercados. Paralelamente, en las agencias de desarrollo multilaterales y en algunas organizaciones no gubernamentales se fue generando consenso sobre un conjunto de objetivos comunes para las propuestas (normativas) de desarrollo rural. Surgió así una definición territorial del desarrollo rural, que incluye pero desborda las actividades agrícolas; y que enfatiza los vínculos de las actividades rurales con los mercados externos, las relaciones entre los centros poblados de diferente tamaño y su *hinterland* rural y el papel creciente de los gobiernos subnacionales en la implementación de políticas con impacto local. A esta propuesta algunos autores la denominaron desarrollo territorial rural.

Uno de los principales componentes de las agendas de desarrollo territorial rural es el criterio de que las políticas territoriales (subnacionales) deberían estar basadas en el diseño, gestión, monitoreo y evaluación participativa por la sociedad civil organizada, en alianza con los gobiernos locales, con base en un enfoque ascendente: «de abajo hacia arriba». Es el criterio que recibió el nombre de desarrollo «endógeno» y cuya inspiración provino del éxito logrado por algunas experiencias territoriales de crecimiento económico y competitividad a partir de pequeñas y medianas empresas en el marco de la Unión Europea (Vásquez Barquero, 1999; Martínez, 2001; Pérez y Caballero, 2004).

El artículo busca proporcionar un inicio de respuesta a cuatro preguntas. Primero: ¿Cuáles fueron las condiciones que hicieron posible el surgimiento —y duración en el tiempo— de un proceso de crecimiento «endógeno» en un territorio rural de los Andes venezolanos; incluso, en ocasiones, bajo condiciones de mercado y de políticas desfavorables? Segundo: ¿Cuáles son las condiciones para que esta experiencia pueda ser replicada en otros contextos territoriales? Tercero: con base en el análisis de este proceso, ¿qué conclusión podemos extraer sobre las posibilidades de cohesión social y convergencia económica a escala nacional? Por último, ¿cuáles serían las condiciones para una política nacional de desarrollo territorial rural con criterios de cohesión social y sustentabilidad ambiental?

Además de esta introducción y las conclusiones, el artículo está organizado en dos partes. La primera parte está dedicada a la descripción y análisis de un proceso de transformaciones territoriales en los Andes venezolanos. El caso ilustra la posibilidad del desarrollo territorial rural, bajo ciertas condiciones, incluso bajo condiciones de mercado y de políticas no siempre favorables. En la segunda parte se analizan críticamente algunas propuestas de desarrollo territorial rural en América Latina. Por último, en las conclusiones, se resumen algunas implicaciones para el diseño de las agendas de política a diferentes escalas territoriales.

2. ANÁLISIS DE UN PROCESO DE TRANSFORMACIONES RURALES EN LOS ANDES VENEZOLANOS

El objetivo de esta sección es la descripción y análisis de un proceso de transformaciones rurales en los Andes venezolanos: el caso del desarrollo «endógeno» del municipio Rangel, capital Mucuchíes, del estado Mérida, en los Andes venezolanos.

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El municipio Rangel forma parte de los altos valles andinos del occidente de Venezuela². La carretera Transandina comunica a Mucuchíes, capital del municipio (4.000 habitantes en 1999), con la ciudad de Mérida, a unos 36 kilómetros al oeste y con Caracas, a unos 600 kilómetros al este³. En 1925, el incremento de los ingresos petroleros permitió al Estado concluir la pavimentación de la carretera Transandina, que recorriendo el curso medio del río Chama, vinculaba a los valles andinos con el centro del país.

A inicios de la década de 1960, la prioridad del gobierno nacional en los Altos Valles Andinos era el acondicionamiento físico del territorio y la conservación de sus frágiles ecosistemas. En 1959, a fin de lograr ambos objetivos, el Ministerio de Agricultura y Cría implementó el Programa de Subsidio Conservacionista. El programa incluía la reforestación de las pendientes, el drenado de los humedales, el despedrado de los terrenos planos a fin de permitir el arado mecanizado y la construcción de muros de piedra y terrazas a fin de controlar la erosión. No obstante, sin proponérselo explícitamente, el Programa también estaba creando las condiciones de infraestructura indispensables para el desarrollo del sistema capital-intensivo de producción de papa y hortalizas de clima templado, que espontáneamente se había estado gestando en la zona, como consecuencia del proceso de transferencia de tecnología iniciado por inmigrantes canarios una década antes.

En 1974 el gobierno nacional dio inicio a otro ambicioso programa de desarrollo: el Programa Valles Altos, focalizado hacia la construcción de pequeños sistemas de riego por gravedad, comenzando por los fondos de valle. El Programa, con el tiempo, tendió a extenderse hacia los frágiles ecosistemas de los páramos andinos. El resultado inmediato de este proceso fue una considerable disminución de la agricultura de subsistencia en la zona, el abandono del policultivo, y la gradual adopción de un sistema capital-intensivo en la producción de papas y hortalizas.

2 La extensión del municipio Rangel es de 74.200 hectáreas, en diversos pisos altitudinales localizados entre los 2.000 y los 4.077 m.s.n.m.

3 Según la información suministrada por la oficina local del Ministerio de Agricultura y Tierras, en el año 2002, había unos 1.237 productores de papa en el municipio. No obstante, debido a que no se dispone de un censo o estadísticas confiables sobre la distribución de los productores según superficie agrícola, ni según la escala de otros activos, según estimaciones de informantes locales calificados aproximadamente un tercio de los productores de papa podría ser catalogado como «pequeño»; ello debido a que la superficie por ellos sembrada de papa era menor a 5 hectáreas (Llambí *et al.*, 2004).

El uso intensivo de la tierra también condujo a una mayor incorporación de fertilizantes (químicos y orgánicos) al suelo, a fin de compensar la pérdida de nutrientes. Adicionalmente, durante la década de 1970, el auge de los ingresos petroleros permitió a los sucesivos gobiernos incrementar los montos asignados a los programas de crédito subsidiado a los agricultores para la compra de insumos y la inversión en bienes de capital.

La intensificación de cultivos no detuvo, sin embargo, la extensión de la frontera agrícola hacia los páramos andinos, lo que implicó la gradual intervención de unos ecosistemas sumamente frágiles, de baja fertilidad y con agudas pendientes⁴. Todo lo cual ocasionó mayor erosión de los suelos, el agotamiento de los acuíferos y la contaminación de los recursos hídricos.

Como resultado de todo lo descrito anteriormente, a medida que se incrementaba la demanda nacional de papa, los terrenos comunales de los páramos —anteriormente destinados a una ganadería trashumante y a la recolección de leña— gradualmente se incorporaron a los cultivos hortícolas; y, en particular, al monocultivo de papa.

En 1992, la apertura comercial con Colombia, en el contexto del primer programa de reformas estructurales, tuvo como consecuencia la introducción de nuevas enfermedades fitosanitarias, debido al incremento de las importaciones de papa y a la ausencia de efectivos controles en la frontera. Lo que, a su vez, condujo a un mayor empleo de biocidas, elevando los costos de producción del cultivo. En un contexto de reducción de precios de la papa —como consecuencia de las importaciones— y del incremento de costos de los insumos importados, la rentabilidad del cultivo disminuyó considerablemente.

En general y a pesar de algunos cambios menores en sus sistemas productivos, los pequeños productores de papa no fueron capaces de incrementar sustancialmente sus rendimientos a fin de competir exitosamente con las importaciones; como tampoco lograron reconvertir sus explotaciones hacia productos más rentables y competitivos. Situación que contrasta con las ventajas comparativas y competitivas de que dispone la zona para la exportación de algunos cultivos no-tradicionales, por Ej., vegetales, frutas frescas de clima templado y flores con gran demanda en los mercados internacionales (Zezza y Llambí, 2001; Llambí *et al.*, 2004; Carciente y Oviedo, 2007; Duarte, 2008).

4 El paso del subsidio conservacionista al programa valles altos es de sumo interés. Algunos autores estiman que el Programa Valles Altos cambió la geografía de los Andes venezolanos.

2.2. LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES INTEGRALES DEL PÁRAMO (PROINPA)

Fue en este contexto que, en 1996, llegó a Mucuchíes un agrónomo europeo con el objetivo de implementar –con carácter experimental– un programa de desarrollo agroecológico: el Programa Andes Tropicales (PAT)⁵.

El programa agroecológico del PAT suponía un cambio radical en los enfoques de capacitación y extensión agrícola llevados a cabo en el área hasta ese momento. En lugar de parcelas de demostración, basadas en un flujo vertical de información del agrónomo al agricultor, el programa creó una red de fincas piloto en las cuales se esperaba que los agricultores experimentaran con nuevas técnicas productivas y se comprometieran a transferir la información adquirida a los otros agricultores de la zona.

Entre 1996 y 2000, el PAT creó una red de 25 unidades productivas en cinco comunidades. Cada finca estableció su propia agenda de investigación, en la que diferentes formas de intervención eran puestas a prueba: por Ej., el manejo integrado de plagas, la rotación de cultivos, la construcción de terrazas, el cultivo de huertos domésticos y la construcción de túneles de plástico a fin de evitar los daños de las heladas.

El proyecto concluyó en el 2000, cuando se terminaron los fondos europeos. No obstante, uno de sus principales resultados intangibles fue que la mayoría de los veinticinco hogares vinculados a las fincas piloto decidieron crear una organización –la Asociación de Productores Integrales del Páramo (PROINPA)–, con el objetivo de dar continuidad a sus propios proyectos de desarrollo y aunar esfuerzos para consolidar sus avances en todo el municipio.

Inicialmente, el objetivo central de la organización eran muy similar al del PAT: construir mecanismos para el manejo integrado de las fincas asociadas, mediante el diseño de prácticas agrícolas sustentables ecológica y socialmente; a la vez que experimentar los vínculos entre algunas técnicas modernas y el rescate de algunas de las prácticas agrícolas tradicionales que juzgaban compatibles con el enfoque agroecológico (Programa Andes Tropicales, 2000; Fuenmayor y Rodríguez, 2006).

En breve los objetivos de diversificación de cultivos y de mercados, así como la disminución de los costos de producción en el sistema productivo de papas y hortalizas, se convirtieron en prioritarios. A más largo plazo, sin embargo, el objetivo seguía siendo el mismo: la consolidación de unidades productivas auto-suficientes financiera y administrativamente.

Pronto la asociación identificó tres principales problemas para el logro de sus objetivos: el acceso al crédito, la necesaria diversificación de los canales de comercialización y la necesidad de búsqueda de nuevos nichos de mercado, a fin de consolidar sus esfuerzos de diversificación productiva.

A pesar de diferentes intentos para acceder a fuentes externas de financiamiento, el acceso al crédito en condiciones favorables fue una de las principales barreras a fin de lograr éxito como agricultores comerciales. Por lo que, una de las primeras tareas de PROINPA fue crear su propia cooperativa de ahorro y crédito, mediante la creación de un fondo rotativo, y el acceso a los fondos gubernamentales destinados a apoyar al movimiento cooperativo.

En diferentes oportunidades, a fin de diversificar sus canales de comercialización, PROINPA se aventuró también a la comercialización directa de sus productos (por Ej., la venta en los mercados mayoristas de Barquisimeto y Caracas, con sus propios vehículos). La mayoría de esos esfuerzos concluyeron, sin embargo, en fracasos. Ello, en lugar de hacerles perder el entusiasmo y la cohesión de la organización, les proporcionó experiencia a fin de redefinir sus estrategias con un horizonte de más largo plazo.

Concluyeron, por ejemplo, que no era suficiente diversificar la producción a fin de participar en los mercados ya existentes (debido a su estructura generalmente oligopólica), sino que también era necesario construir nuevos mercados, para lo cual requerían contar con la infraestructura y tecnología apropiada a fin de estar en capacidad para negociar sus productos (generalmente frescos y perecederos).

Estas experiencias y reflexiones les condujeron a diseñar un nuevo proyecto: la construcción de un invernadero comunal. Inicialmente fue de carácter experimental, con el objetivo de producir semillas certificadas de papa, reduciendo así la importación del insumo más importante y costoso de la cadena de producción de papa; garantizando también su producción bajo condiciones agroecológicas adaptadas a las condiciones biofísicas de los ecosistemas locales. Sin embargo, era un Proyecto que suponía no solo una considerable inversión de capital, sino también la adopción de innovaciones tecnológicas sumamente intensivas en conocimiento. Para la implementación del mismo, la organización construyó una red de «alianzas estratégicas» con diferentes agencias externas: el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), el Centro Internacional de la Papa (CIP) con sede en Lima, el Instituto de Cooperación Agrícola (ICA) con sede en Colombia, la Junta Nacional de la Papa, el Programa Estraté-

⁵ El Programa Andes Tropicales (PAT) contaba con el apoyo financiero del Reino de Bélgica y de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

gico de Seguridad Alimentaria (PESA) de la FAO, la Alcaldía del municipio Rangel, entre otras (Romero, 2007)⁶.

El principal logro de PROINPA, desde la perspectiva de este artículo, no es su capacidad de innovación tecnológica y la transformación de sus sistemas productivos con criterios agroecológicos, sino de índole institucional (*i.e.* establecimiento de reglas de juego y construcción de organizaciones y redes sociales). En otras palabras, la construcción de una red de organizaciones sociales «endógena», es decir «desde abajo» y suficientemente autónoma, que busca liderar los procesos de desarrollo territorial del municipio.

En primer lugar, la construcción de las reglas que rigen la organización de los productores agrícolas del municipio: PROINPA; una Organización, basada en la estricta aplicación de dos principales reglas. La primera de ellas tiene un objetivo de desarrollo sustentable: que los productores asociados implementen un estricto manejo agroecológico de sus unidades productivas. La segunda tiene un objetivo autogestionario: la gestión democrática de la organización. Lo que se concreta en una repartición, lo más igualitaria posible, de las tareas que genera la organización; la activa participación de todos los socios en sus actividades y el estricto control del cumplimiento de las tareas asignadas a cada socio. Se trata de normas que, en ocasiones, generan problemas disciplinarios. Esto significa que algunos de sus socios iniciales hayan abandonado la organización; lo que, con el tiempo, fue compensado por la incorporación de otros nuevos (Duarte, 2008).

En segundo lugar, pero no menos importante, la construcción de una red de organizaciones sociales de la sociedad civil en el municipio: la Fundación Mucusutuy⁷.

6 Hasta el presente los principales resultados de este proyecto son: la producción de semilla de papa de variedades de consumo fresco e industrial; en un área de 2.200 m², con capacidad: 75.000 vitro-plantas de papa/ciclo (2,5 ciclos/año), con una producción estimada en unos 900.000 mini-tubérculos por año. Actualmente, el invernadero cuenta además con silo de almacenamiento con capacidad para 400 tm (Romero, 2007; Higuera, 2011).

7 Además de PROINPA pertenecen a esta red o conglomerado (*cluster*) las siguientes organizaciones: la Cooperativa de Ahorro y Crédito «Indio Tinjacá», creada en 2002, con el objetivo de otorgar créditos a los productores que trabajen con criterios agroecológicos; así como para la diversificación hacia otras actividades de producción y servicios amigables con el ambiente. El Centro de Educación Popular (CEDIP), que se ha orientado a la implementación de programas para la diversificación productiva de la zona (por Ej., la cría de truchas, lombricultura, taller-escuela de tejidos «La Chamarra»). Una empresa comercializadora (ACPCA) y dos cooperativas (por Ej., la Cooperativa de Mujeres «Seis Pasos utilizando mis manos» para el procesamiento de la lana) y la organización de mujeres tejedoras de

2.2. LECCIONES APRENDIDAS

El programa de desarrollo agroalimentario de PROINPA demuestra la posibilidad de gestión empresarial de las pequeñas fincas familiares: su mayor eficiencia productiva y la construcción de nuevos vínculos con los mercados, mediante garantías al volumen y a la calidad de una oferta crecientemente diferenciada de productos.

El proyecto invernadero de PROINPA demuestra la posibilidad de innovación, diseño e implementación de una tecnología capital-intensiva, amigable con el ambiente, por una organización de productores de pequeña escala.

PROINPA y la Fundación Mucusutuy demuestran la posibilidad de construcción de un proyecto estratégico de desarrollo territorial rural orientado a la sustentabilidad ambiental, como resultado de un proceso de aprendizaje por ensayo y error, mediante la construcción de alianzas estratégicas al interior del territorio y con los agentes externos. Por lo tanto, la posibilidad de construcción de un proyecto estratégico de desarrollo territorial rural, «desde abajo», orientado a la competitividad de las cadenas agroalimentarias locales, la diversificación productiva y de mercados y la innovación tecnológica con criterios de sustentabilidad ambiental. Todo esto, como resultado de un proceso de aprendizaje por ensayo y error mediante la construcción de alianzas estratégicas tanto al interior del territorio, como con una multiplicidad de agentes externos.

Los procesos de transformación rural del municipio Rangel demuestran la necesidad de alianzas estratégicas entre las organizaciones de la sociedad civil con: i) las entidades públicas (el Estado); ii) las empresas que controlan las cadenas de valor (los mercados), manteniendo su autonomía financiera y de gestión; y, iii) las organizaciones de la sociedad civil externas (por Ej., las ONGs vinculadas a la cooperación internacional, o de índole nacional).

¿Es sostenible este proceso en el tiempo? ¿Es replicable este proceso a otros territorios? Si fuera posible, ¿cuáles serían las condiciones para lograrlo?

Gavidia. Dos liceos (el liceo nocturno Mucuchíes, cuyo objetivo es superar la deserción escolar de los hijos de los agricultores locales; y un liceo agroecológico para adultos). La Asociación de Baquianos y Posaderos del Páramo (ASOBAP), vinculada al programa de turismo rural del PAT, y que constituye otra importante fuente de ingresos para muchos hogares de la zona. Y, además, diversas asociaciones ambientalistas como la Asociación de Coordinadores de Ambiente (ACAR) para el resguardo de las nacientes y las microcuencas, el Centro de Educación Popular (CEPDIF) y la Comisión para el Aprovechamiento de las Plantas Medicinales (COMAPLAMED).

Los procesos de transformación territorial «endógenos», no están exentos de la influencia de múltiples factores «exógenos». Su sostenibilidad en el tiempo solo está garantizada mientras duren las condiciones que le dieron origen, en particular la existencia de una «masa crítica» de agentes comprometidos con una agenda de desarrollo compartida (lo que la literatura académica denomina como «capital social»).

Por otra parte, los proyectos a escala nacional también suelen enfrentar limitaciones de escala; y, en particular, no suelen estar en capacidad para resolver problemas estructurales que desbordan los límites del territorio o su capacidad de acceso a recursos exclusivamente «endógenos».

3. LAS AGENDAS DE DESARROLLO RURAL

Rural y urbano son nociones típico-ideales que ocupan los dos extremos de un continuum, y que —en gran medida— ya han sido abandonadas por las ciencias sociales. Las relaciones entre los pequeños asentamientos de población (rurales) y los grandes asentamientos (las áreas urbanas o ciudades) son extremadamente complejas y heterogéneas.

Hasta hace poco, en las ciencias sociales, la noción de ruralidad estuvo vinculada a tres fenómenos interrelacionados: la relativamente baja densidad demográfica de un territorio, el predominio de la agricultura en su estructura productiva y la menor accesibilidad relativa del territorio a los centros de mercado y de decisiones políticas. No existe, sin embargo, consenso ni en la definición académica de ambos conceptos, ni un estándar internacional para la medición de las poblaciones rurales o urbanas. En la práctica, cada país ha adoptado su propio umbral (demográfico o físico), a fin de adaptar ambas nociones a las características de su poblamiento y a las jurisdicciones legales y administrativas adoptadas por el Estado.

4. LAS AGENDAS DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL

Las agendas del desarrollo rural con enfoque territorial se basan en la superación de los enfoques tradicionales del desarrollo «rural», exclusivamente focalizados hacia el sector agrícola. El enfoque (normativo) del desarrollo rural territorial deriva de la constatación empírica de la creciente heterogeneidad de condiciones de los territorios definidos como «rurales», como resultado de la diversidad de sus sistemas de producción de bienes y servicios (agrícolas, industriales, mineros, turísticos, etc.) y de la diversidad de fuentes de empleo e ingresos (agrícolas y no-agrícolas) de los hogares; aunque en la mayoría de los países, las actividades agrícolas conti-

núen siendo prioritarias. El enfoque territorial, por otra parte, es consecuente con las estrategias de vida de las poblaciones rurales que buscan reforzar sus vínculos con el territorio, con su residencia, y con sus valores culturales mediante la consolidación de una identidad territorial común⁸.

Según este enfoque, por lo tanto, los territorios no están definidos únicamente por sus vínculos con la tierra —y en términos más generales con los recursos naturales y el ambiente biofísico— sino también por sus vínculos con los centros poblados «urbanos».

En otras palabras, el enfoque se fundamenta en un concepto ampliado de los territorios definidos censalmente como «rurales»⁹, lo que incluye a los pequeños y medianos centros poblados con los cuales la población que habita en zonas de baja densidad demográfica tiene vínculos económicos, culturales y políticos.

El desarrollo de la población «rural» supone, por lo tanto, reforzar sus vínculos con activos productivos de diferente tipo (capital físico, financiero, humano, y social); así como con los mercados (de productos e insumos) y con los servicios (públicos y privados).

El enfoque territorial del desarrollo también plantea la superación de una visión paternalista y clientelar de las políticas públicas. Ello supone el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y de las agencias del Estado que operan a nivel subnacional, mediante la creciente participación de la población en el diagnóstico, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas y los programas de desarrollo rural.

En Venezuela el papel de los Consejos Comunales, en tanto organizaciones creadas y gestadas, «de abajo hacia arriba», aunque con estrechas vinculaciones con los poderes públicos, sería de gran importancia para la correcta delimitación y conceptualización de los territorios rurales.

¿Cómo definir los límites de los territorios (por Ej., en un municipio, entre diferentes consejos comunales, en mancomunidades de municipios, con criterios físico-geográficos, o basados en la identidad cultural y so-

8 En América Latina se han implementado diversos programas de desarrollo rural con enfoque territorial. Dos de los más divulgados en la literatura académica son el programa «Expider» del BID, con experiencias piloto en Bolivia, Ecuador y Honduras entre 2003 y 2005 (Sumpsi, 2005); y el «Programa Territorios de Ciudadanía» de Brasil, iniciado en 2008, que abarca casi 1.000 municipios y donde viven más de 2.000.000 de familias de pequeños agricultores (Oliveira, 2008).

9 En Venezuela, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la definición censal de población rural es la que habita en centros poblados menores a 2.500 habitantes.

cial de sus habitantes?; y, ¿cuál debería ser su escala económica apropiada? son dos temas prioritarios en el diseño e implementación de estos programas. La experiencia latinoamericana y europea, sin embargo, es que no deben existir recetas preestablecidas para la delimitación de los territorios; aunque algunos criterios claves para una eficaz delimitación puedan ser la escala, la relativa homogeneidad de condiciones socioeconómicas y la identidad territorial. De hecho, las condiciones de implementación de cada programa o proyecto dependerán de múltiples contingencias territoriales e históricas; por lo que es prudente afirmar que, solo la población implicada estará en condiciones para construir gradualmente su propia agenda de desarrollo territorial (Sumpsi, 2005).

Es importante enfatizar, por lo tanto, la capacidad de innovación (o de emprendimiento) de los actores rurales y su capacidad para generar organizaciones capaces de implementar sus agendas en forma autónoma. Ello, sin embargo, debería ser apoyado por una red institucional pública de apoyo a la planificación e implementación de los programas de desarrollo rural territorial.

Las condiciones para el éxito de este enfoque deberían ser: en primer lugar, la gradual construcción de organizaciones representativas a nivel local que legitimen socialmente la agenda de desarrollo del territorio. En segundo lugar, es necesaria la gradual institucionalización administrativa y financiera (en la medida de lo posible, con énfasis en fondos locales) de los proyectos, a fin de garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Por último, está la creación de una red de servicios de apoyo (por Ej., investigación aplicada, extensión agrícola «campesino a campesino», información de mercados, servicios financieros) a fin de construir las ventajas competitivas que garanticen la participación del territorio en un contexto de mercados cada vez más globalizado.

Si suponemos como inevitables (al menos en el corto plazo) los actuales procesos de globalización de mercados, la competitividad territorial tiene que ser uno de los componentes de cualquier agenda del desarrollo rural con enfoque territorial. Pero, ¿cómo se vincula el objetivo de competitividad territorial (y de las cadenas de valor) con los otros objetivos del desarrollo rural? ¿Qué relaciones existen entre la competitividad de las empresas, la equidad social y la conservación de los recursos naturales de los ecosistemas locales? ¿Quién y cómo se decide el uso de los recursos del territorio, sus bienes comunes y áreas protegidas (por Ej., sus recursos hídricos comunes, bosques comunales, etc.)? ¿Cómo se vincula el objetivo (normativo) de competitividad te-

rritorial con otros posibles objetivos del desarrollo rural territorial?

5. EL DISCURSO DEL DESARROLLO RURAL TERRITORIAL Y SUS DILEMAS

Existen múltiples dilemas para el logro simultáneo de la competitividad territorial (subnacional), una mayor equidad social, la cohesión territorial (a escala nacional), y un desarrollo ambientalmente sustentable (como quiera que se definan estos términos).

5.1. EL DILEMA ENTRE EFICIENCIA Y EQUIDAD

En tanto que, a nivel agregado, una economía subnacional pudiera beneficiarse de una mayor competitividad, a nivel micro siempre existen ganadores y perdedores. Esto genera un implícito dilema entre los costos y beneficios del crecimiento económico *vis-à-vis* los beneficios de las políticas redistributivas (por Ej., subsidios e impuestos, o reformas estructurales) (Alesina y Rodrik, 1994; Bongardt y Torres, 2007).

Aunque el argumento de que el crecimiento económico es una condición necesaria para el alivio de la pobreza y una mayor equidad se ha convertido en un axioma cada vez menos debatido, aún existe considerable debate en la literatura especializada sobre cómo maximizar los efectos del crecimiento económico sobre la equidad y sobre cuál es el nivel óptimo de intervención del Estado para el logro simultáneo de ambos objetivos (Ashley y Maxwell, 2001).

Permitir al mercado trabajar con miras a incentivar una eficiente asignación de recursos es una condición necesaria que, sin embargo, necesita ser complementada con incentivos para mejorar la capacidad de ajuste de los pobres ante los frecuentes cambiantes del entorno, como también con incentivos para fomentar su capacidad de innovaciones tecnológicas e institucionales (Bongardt y Torres, 2007).

La teoría económica clásica suponía que, una vez removidas las distorsiones y sesgos en el comercio internacional, la ventaja comparativa latente de un país o territorio subnacional se manifestaría automáticamente. No obstante, hoy en día se sabe que las estructuras sociales importan. Lo que en las áreas rurales —particularmente de los países de menores ingresos— se traduce en estructuras de tenencia inequitativas y en múltiples fallas de mercado.

Lo que realmente importa es el patrón de crecimiento, aunque en situaciones específicas el diseño específico del crecimiento equitativo dependerá de múltiples factores contingentes, incluyendo las condiciones históricas iniciales y las instituciones nacionales (Nissanke y Thorbecke, 2006).

5.2. EL DILEMA ENTRE LA COMPETITIVIDAD DE UN TERRITORIO (SUBNACIONAL) Y LA COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL (A ESCALA NACIONAL)

¿Son las políticas territoriales subnacionales una asignación de recursos eficientes o una pérdida para el fisco nacional? La respuesta a esta pregunta involucra un delicado dilema entre la eficiencia espacial –lo que frecuentemente requiere la aglomeración de las actividades económicas– y la cohesión territorial a escala nacional (Baldwin *et al.*, 2003).

Algunos autores argumentan que las políticas regionales para promover el desarrollo de las regiones retrasadas pueden distorsionar una eficiente asignación de recursos e impedir el crecimiento económico nacional. Por el contrario, otros sostienen que si el gobierno solo otorga prioridad a las inversiones en las regiones altamente productivas, las desigualdades de ingreso regionales se incrementarán. Por lo que, una distribución más equitativa de los ingresos tendrá efectos positivos en el crecimiento económico agregado (Gezici y Hewings, 2004).

Las estructuras productivas locales también importan. El vínculo entre la competitividad territorial y el crecimiento económico local depende en gran medida del número y los tipos de firmas e industrias localizados en un territorio. Durante las décadas de 1950 y 1960 tuvo lugar un intenso debate sobre la prioridad sectorial para los países en vías de desarrollo: agricultura versus industria. El debate, inspirado en el principio ricardiano de la ventaja comparativa, sugería que los países menos desarrollados –debido a su dotación inicial de recursos– deberían reforzar las actividades primarias a fin de satisfacer tanto la demanda local como la producción de excedentes para la exportación. Lo que, a su vez, los colocaría en situación de importar las manufacturas que necesitaran desde los países que disponían de ventajas comparativas en las industrias manufactureras.

En la economía global actual, sin embargo, la mayoría de los autores concuerdan que solo los países que construyen ventajas competitivas hacia las actividades de mayor valor agregado e intensivas en conocimiento, obtendrán ganancias significativas de la apertura de sus mercados (Nissanke y Thorbecke, 2006). El riesgo, como enfatizó Krugman (1995) al señalar la capacidad de auto-reproducción del patrón de especialización inicial, es amarrarse a tecnologías estancadas. Krugman también argumentó que la intervención deliberada del Estado es necesaria a fin de liberar a la economía de una parálisis histórica con respecto a la especialización en un sector de lento crecimiento (Bristow, 2005).

5.3. EL DILEMA ENTRE LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL Y LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

La preocupación por la capacidad de recuperación y vulnerabilidad de los servicios ambientales a la sociedad, también significa que las oportunidades para el crecimiento económico deben ser balanceadas por los esfuerzos por manejar sustentablemente el ambiente. Este objetivo influye en la elección de políticas de crecimiento económico y conduce a conceptos como el desarrollo sustentable, concepto que explícitamente aborda el dilema entre la maximización de la competitividad y otros objetivos sociales y ambientales (Dubarle, 2003). Los estándares ambientales laxos, por ejemplo, pueden generar círculos viciosos entre las externalidades ambientales negativas (por Ej., la contaminación y la pérdida de biodiversidad) y el incremento de la pobreza rural (Bristow, 2005).

El estrecho vínculo entre los territorios «rurales» y los ecosistemas «naturales» determina también la necesaria preocupación por los múltiples dilemas que pueden surgir para el logro simultáneo del crecimiento económico «rural» y la sustentabilidad ambiental. El logro simultáneo de ambos objetivos se apoya en la habilidad para incrementar la productividad de sectores «rurales» clave, particularmente el sector agrícola, el cual continúa siendo la principal fuente de ingresos para la mayoría de las poblaciones rurales en los países de bajos ingresos. No obstante, aunque una parte importante del incremento en la productividad agrícola pudiera lograrse mediante la adopción de variedades de semilla mejoradas –como fue el caso en la revolución verde en Asia–, otros insumos orientados al incremento de la producción (por Ej., fertilizantes y pesticidas) son necesarios. Estos insumos, sin embargo, son potencialmente generadores de externalidades ambientales negativas, con consecuencias negativas adicionales para la salud humana. Los beneficios de la intensificación agrícola, por lo tanto, necesitan ser balanceados con los costos ambientales –frecuentemente invisibles– que acompañan al uso creciente de esos insumos.

El daño opuesto es la extensión de la frontera agrícola hacia las tierras marginales, o las frágiles tierras bajo regímenes de propiedad común, o las áreas protegidas por el Estado (Reardon *et al.*, 1998).

Afortunadamente, en la actualidad existen posibilidades técnicas para generar ciclos virtuosos entre una intensificación ambientalmente sustentable (por Ej., terrazas para evitar la erosión de los suelos, la limpieza a mano de los terrenos, el reciclaje de materia orgánica, los invernaderos, etc.) y el logro de los objetivos de seguridad alimentaria y aprovecha-

miento de las oportunidades de comercialización por parte de los agricultores (Reardon *et al.*, 1998)¹⁰.

Para el logro simultáneo de ambos objetivos frecuentemente también son necesarias políticas de redistribución de tierras, así como otras políticas de reforma, a fin de superar los obstáculos estructurales y las fallas de mercado que impiden la adopción de estas tecnologías sociales y amigables con el funcionamiento del entorno biofísico. Es necesario, por lo tanto, que el Estado asuma un camino intermedio entre las potenciales bondades de la liberalización de mercados —que, sin embargo, no proveyó de los necesarios bienes públicos en el pasado— y un fuerte intervencionismo. No obstante, el apropiado diseño de las necesarias inversiones públicas en infraestructura física, y las reformas estructurales tendría que ser realizado de manera *ad hoc* en cada país (Reardon *et al.*, 1998).

6. LOS RETOS TECNOLÓGICOS

6.1. LA INTENSIFICACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE

Uno de los principales retos de las políticas agroalimentarias y de desarrollo territorial para América Latina es la posibilidad de generar patrones tecnológicos de intensificación agrícola sustentable. Ejemplo de ellos son la posibilidad de un uso mucho más intensivo de la biomasa y la utilización de tierras degradadas en lugar de áreas más fértiles y de agroquímicos.

Una alternativa que es necesario explorar es la implementación masiva, entre los pequeños productores agrícolas, de la «finca agroecológica integral». Se trata de un modelo que propone la integración de la producción animal y vegetal en campos de cultivo diversificados y el reciclaje de materiales, como una forma de optimizar el aprovechamiento de los recursos locales y facilitar la sostenibilidad del sistema productivo.

La agricultura ecológica, al basarse en la ecología de suelos (sistemas de mínima labranza, incremento de la cobertura de suelos) y en una apropiada rotación de cultivos, minimiza la necesidad de controles de plagas y enfermedades; ya que en un ambiente de abundante oferta alimentaria aparece igualmente una gran cantidad de organismos, lo que facilita el autocontrol de los agroecosistemas. Por el contrario, un cultivo genéticamente uniforme tiene una mayor susceptibilidad a cualquier factor adverso ya que no posee la diversidad de organismos que lo contrarresten.

¹⁰ Según Reardon *et al.* (1999) la intensificación es sustentable cuando cumple con dos criterios: (a) ambiental: la tecnología mantiene o incrementa los rendimientos físicos; y (b) económico: la tecnología es compatible con los objetivos del productor (por Ej., seguridad alimentaria, ingresos monetarios).

A mi juicio, no sería conveniente descartar *a priori* lo que algunos denominan una «segunda» y «tercera» generación de agrocombustibles que utiliza plantas herbáceas y residuos de cultivos, con potencialidad para mejorar el balance entre el consumo energético y la reducción de los gases con efecto invernadero. En este sentido sería conveniente explorar la potencialidad de cultivos que pudieran adaptarse a las condiciones de las tierras menos fértiles.

No obstante, ni la agricultura ecológica ni los agrocombustibles pueden ser considerados la panacea para la solución de los problemas actualmente existentes, aunque pudieran constituir componentes importantes de un desarrollo agrícola más sustentable y de un crecimiento económico menos dependiente de los combustibles fósiles.

Si no se abordan las causas estructurales de la pobreza y de la actual inseguridad alimentaria global, nacional y de los hogares, la adopción de nuevas tecnologías no resolverá los problemas. Los posibles impactos de los cambios tecnológicos dependen de los arreglos institucionales que median entre la tecnología y la distribución de los activos necesarios para implementarlas (Rosset *et al.*, 2004).

La solución más fácil sería producir más alimentos mediante agroquímicos o ingeniería genética, independientemente de sus efectos distributivos o sociales y de sus negativos impactos ambientales. Los incrementos en la productividad de algunos cultivos como resultado de la revolución verde no son un mito. Gracias a las semillas de alto rendimiento se obtuvieron incrementos de millones de toneladas de cereales y oleaginosas, pero no se eliminó el hambre, ni siquiera en los países donde principalmente se implementaron estas tecnologías (Rosset *et al.*, 2004).

7. LOS RETOS INSTITUCIONALES

Por último, es necesario repensar el papel de los Estados, los mercados y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de generar los cambios estructurales que se requieren para lograr niveles socialmente aceptables y ambientalmente sustentables, de crecimiento económico y desarrollo rural a todas las escalas (nacional, subnacional y de los hogares).

En relación con los Estados, la prioridad debería estar centrada en el diseño e implementación de las políticas estructurales necesarias. Esto —como se sabe— no está exento de grandes dificultades de índole político; y, en general, también puede requerir de plazos suficientemente largos para que lograr los resultados esperados, así como de la necesidad de la gradual construcción de los consensos nacionales para su implemen-

tación. En otras palabras, requiere de un proyecto de país consensuado. No obstante, es importante destacar también la conveniencia de diseñar e implementar políticas de protección temporal hasta que las políticas estructurales estén en capacidad para brindar todos sus frutos.

Por otra parte, repensar el papel del Estado supone superar los peligros de una excesiva intervención sobre el funcionamiento de los mercados. Por ejemplo, el peligro de los controles de precio y su corolario: el desabastecimiento; el peligro de los tipos de cambio sobrevaluados y sus incentivos perversos sobre los agentes económicos. Está adicionalmente el peligro de políticas proteccionistas extremas y sus consecuencias: la retaliación por parte de los países con mayor poder político y de mercado.

Por último, pero no menos importante, es indispensable repensar también el papel de la sociedad civil organizada. Es decir, la necesidad de una auténtica participación «de abajo hacia arriba» de los ciudadanos y sus organizaciones sociales en el diagnóstico, diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas.

8. CONCLUSIONES: IMPLICACIONES PARA EL DISEÑO DE LAS AGENDAS DE POLÍTICA

En Mucuchíes, el retorno al territorio de agricultores jóvenes y con un conocimiento mucho mayor que el de sus progenitores sobre el funcionamiento de los mercados y de las reglas de juego del entorno político, fue capaz de transformar sus unidades productivas en pequeñas empresas rurales competitivas.

Estos agricultores, al asociarse en PROINPA, revelan la capacidad de gestión de una masa crítica de emprendedores rurales para diseñar e implementar un proyecto común, relativamente independiente, que generó un conjunto de transformaciones sociales en su territorio. Fue un Proyecto capaz de un conjunto de logros: el incremento de la competitividad de las pequeñas empresas rurales, el mejoramiento de la calidad de vida de la población, mejoras en la conservación de los ecosistemas locales, entre otros.

No obstante, una agenda de desarrollo basada solo en iniciativas locales, solo cuando existan condiciones favorables o éstas sean fácilmente alcanzables, corre el riesgo de crear «islas de prosperidad en un océano de pobreza». Como el caso de Mucuchíes demuestra, la existencia de condiciones favorables previas, como una distribución de la tenencia de la tierra relativamente equitativa, la proximidad a centros comerciales dinámicos o el acceso de los jóvenes a un sistema educativo relativamente eficiente, es sumamente conveniente. Cada proceso de transformación local dispone de

rasgos específicos, por lo que no es posible siempre esperar que solo a partir de la agencia de los agentes locales ocurra lo mismo en otros territorios.

A nivel nacional, por lo tanto, el reto es la construcción de un consenso social y político de largo plazo (un proyecto de país), que se plantee el crecimiento económico y la cohesión social y territorial a escala nacional. En Venezuela ello supone superar la dependencia de la renta petrolera y su corolario: el clientelismo, lo que también supone la construcción de una(s) agencia(s) capaces de apoyar los procesos de cambio social subnacionales, sin subordinaciones gerenciales o financieras de ningún tipo. Todo esto deberá estar aunado a políticas públicas: macroeconómicas, sectoriales y territoriales coherentes con las agendas de desarrollo rural y territorial.

A nivel supranacional, el reto es la construcción de un consenso internacional para la reforma de las instituciones globales, la renegociación de los acuerdos multilaterales y la mayoría de los actuales tratados de comercio norte-sur. Esto supondría, en América Latina, el éxito de los programas de integración supranacional.

¿Qué es posible hacer desde la academia? El papel de la academia es explicar los procesos y acompañar inteligentemente a los actores sociales en sus propios procesos.

Pero no hay que llamarse al engaño. El problema fundamental es político; y, como tal, tiene que ser resuelto. No se trata de proponer soluciones fáciles, como por ejemplo la adopción o diseño de nuevas tecnologías independientemente del contexto social, económico y político para su implementación; o de pretender que los problemas se resuelvan solo con dinero.

El problema es político, porque su origen es de naturaleza estructural y su solución pasa por la necesidad de generar consensos viables entre las diferentes fuerzas sociales, económicas y políticas nacionales. Esto, como bien lo sabemos, no es simple. Sería más fácil consolarnos con recetas importadas de otros contextos sociales, o echarle la culpa a «el sistema», a nuestras raíces históricas, o a los agentes externos que nos impiden lograr el «desarrollo».

Es cierto, nuestros problemas tienen raíces históricas, lo que está en el origen de determinadas estructuras. También es cierto que nuestros problemas están vinculados con la estructura y funcionamiento del actual sistema económico y político mundial, lo que impide algunas soluciones y no hace fácil su solución únicamente al interior de nuestras fronteras. Pero una gran parte de la solución está en nuestras manos. Y esto solo se podrá lograr si se generan los consensos que hagan

posible el diseño de políticas para lograr cambios estructurales. Y si los consensos dejan de ser solo discursos y se convierten en políticas que, de hecho, transformen la realidad «desde abajo», con la participación de los ciudadanos individuales; y sobre todo de la sociedad civil organizada. Y eso no es fácil.

Requiere la coordinación de políticas entre los diferentes niveles de gobierno, a fin de alinear los incentivos dirigidos a fortalecer las economías de los hogares rurales y sus organizaciones. Requiere, además, generar consensos sobre las agendas de política y cambios institucionales a los diferentes niveles (territorial, nacional y global). Requiere también la focalización de los programas de desarrollo y las inversiones públicas hacia los territorios y poblaciones más vulnerables.

Más allá del debate normativo, son necesarios cambios concretos en los mecanismos reales de diseño e implementación de las políticas públicas: en las reglas de repartición de los presupuestos públicos, a fin de que la infraestructura y los servicios de calidad lleguen a todos los ciudadanos y territorios. Solo un crecimiento económico sostenido, la estabilidad macroeconómica y la prudencia fiscal son capaces de generar empleos y salarios decentes. Es necesario vincular las políticas de seguridad alimentaria con el crecimiento económico y la equidad social. Son necesarios cambios en las estructuras productivas. También nuevas reformas agrarias. Es decir, no solo el reparto de tierras, sino también el acceso al agua, los conocimientos tecnológicos, las infraestructuras y los servicios productivos. Adicionalmente, en el caso venezolano, implica cambios en un modelo de crecimiento excesivamente dependiente de la producción primario-exportadora.

Solo el fortalecimiento de la sociedad civil organizada y su participación en la toma de decisiones, implementación, monitoreo y evaluación de las intervenciones externas (del Estado, las ONG y la cooperación internacional) pueden garantizar la eficacia y la sostenibilidad de las agendas de desarrollo rural territorial y de sus programas. Esto constituye una perspectiva de largo aliento y una ingente tarea para la construcción de equipos interdisciplinarios que apoyen su desarrollo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALESINA, A.; RODRIK, D. 1994. «Distributive Politics and Economic Growth». En: *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 109 (2): 465-90.
- ASHLEY, C.; MAXWELL, S. 2001. «Rethinking Rural Development». En: *Development Policy Review*, Vol. 19 (4): 395-425.
- BALDWIN, R.; FORSLID, P.; OTTAVIANO, G.; NICLOUD, F. 2003. «Economic geography and public policy». En: *Journal of Economic Geography*, Vol. 4: 597-603.
- BONGARDT, A.; TORRES, F. 2007. «Is the European model viable in a globalised world?». En: *Working Paper 20 Universidade do Minho* (disponible en <http://www.ideas.repec.org/p/nip/nipewp/20-2007.html>; consulta: 13/05/2012).
- BRISTOW, G. 2005. «Everyone's a «winner»: problematising the discourse of regional competitiveness». En: *Journal of Economic Geography*, Vol. 5: 285-304.
- CARCIENTE, E.; OVIEDO, V. 2007. *Estrategias económicas de los hogares rurales: Caso Municipio Rangel, Estado Mérida*. (Tesis de Grado Escuela de Economía, inédita). Caracas: UCAB.
- CHIRIBOGA, Manuel. 2004. «Futuro de las estrategias de desarrollo rural». Ponencia presentada en el *Taller sobre Desarrollo Rural* (julio), Caracas: Corporación Andina de Fomento (CAF).
- DUARTE, Magda. 2008. *Seeds of autonomy: Endogenous initiative of high-quality production in the high valleys of the Venezuelan Andes. Case study: Asociación de Productores Integrales del Páramo*. (Tesis de Master en Desarrollo Rural, inédita). Países Bajos: Wageningen.
- DUBARLE, P. 2003. «Competitiveness in metropolitan regions». En: *The OECD-Busan Seminar on Policy Challenges in Metropolitan Regions* (disponible en: <http://www.oecd.org/dataoecd/59/41/609849>; consulta: 13/05/2012).
- FUENMAYOR, N.; RODRÍGUEZ, J. 2006. «Aportes de la economía social al desarrollo sustentable: el caso de la Asociación de Productores Integrales del Páramo en el estado Mérida, Venezuela». En: *Revista Venezolana de Ciencias Sociales*, Vol. 10(1): 144-160.
- GEZICI, F.; HEWINGS, G. 2004. «Regional convergence and the economic performance of peripheral areas in Turkey». En: *Review of Urban and Regional Development Studies*, Vol. 16 (2): 113-132.
- HIGUERA, C. 2011. *Experiencia agroecológica en PROINPA* (versión electrónica). (Disponible vía proinpa21@gmail.com).
- KRUGMAN, P. 1995. *Development, Geography and Economic Theory*. Boston: The MIT Press.
- LLAMBÍ, L.; DUARTE, M.; ZEZZA, A. 2004. *Políticas Públicas y Agricultura: El impacto de las reformas estructurales en los campesinos andinos y en los productores de plátano en el Sur del Lago de Maracaibo*. Roma: FAO.
- MARTÍNEZ, Jorge. 2001. «El desarrollo local en América Latina». En: *Comercio Exterior*, Agosto 2001: 683-693.
- NISSANKE, M.; THORBECKE, E. 2006. «Channels and Policy Debate in the Globalisation-Inequality-Poverty Nexus». En: *World Development*, Vol. 34 (8): 1.338-1.360.

- OLIVEIRA, H. 2008. «Programa 'Territórios da Cidadania': uma estratégia de desenvolvimento territorial e garantia de direitos sociais voltados para as regiões de maior pobreza». En: *Anais do XIII Congresso Internacional del CLAD*. Brasília: Secretaria de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Agrario.
- PÉREZ, A.; CABALLERO, J. M. 2004. *La Nueva Ruralidad en Europa y su interés para América Latina*. Washington D.C.: Banco Mundial y FAO.
- PROGRAMA ANDES TROPICALES. 2000. *Programa de Seguridad Alimentaria* (versión electrónica) (<http://www.fao.org/Regional/LAmerica/progesp/pesa/venez.htm>; consulta: 17/04/2012).
- REARDON, T.; BARRETT, C.; KELLY, V.; SAVADOGO, K. 1999. «Policy Reforms and Sustainable Agricultural Intensification in Africa». En: *Development Policy Review*, Vol. 17 (4): 375-395.
- REARDON, T.; BARRETT, C.; KELLY, V.; SAVADOGO, K. 1998. «Sustainable versus Unsustainable Agricultural Intensification in Africa: Focus on Policy Reforms and Market Conditions». Paper presented at the *AAEA International Preconference on Agricultural Intensification, Economic Development and the Environment*, Salt Lake City, Utah (disponible en www.aec.msu.edu/fs2/inputs/cc_pp.htm; consulta: 11/05/2012).
- ROMERO, R. 2007. *Exploración del subsistema semilla dentro del circuito agroproductivo de la papa en las zonas paperas del estado Mérida, para el diseño de estrategias de competitividad*. Mérida (Venezuela): Facultad de Arquitectura-Universidad de Los Andes (Trabajo de grado de Especialista en Desarrollo Rural Integrado, inédito).
- ROSSET, P.; COLLINS, J.; MOORE LAPPE, F. 2004. «Revolución verde: Lecciones». En: *Tikkun Magazine* (disponible en: <http://www.econ-sition.com.ar>; consulta: 11/05/2012).
- SCHEJTMAN, A.; BERDEGUÉ, J. A. 2002. *Desarrollo rural territorial*. Santiago de Chile: RIMISP.
- SUMPSI, José María. 2005. «Diez lecciones aprendidas con EXPIDER» (presentación, inédita).
- VÁSQUEZ BARQUERO, A. 1999. *Desarrollo, redes e innovación: Lecciones sobre desarrollo endógeno*. Madrid: Pirámide.
- ZEZZA, A.; LLAMBÍ, L. 2001. «Meso-Economic Filters Along the Policy Chain: Understanding the Links between Policy Reforms and Rural Poverty in Latin America». En: *World Development*, Vol. 30 (11): 1.865-1.884.